

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO
DEMANDADO	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-007-2018-00293-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Nivelación salarial
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con los acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO** contra el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recuso de apelación presentado por el apoderado judicial del demandante, contra la sentencia absolutoria que profirió el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 27 de noviembre de 2018, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el demandante JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO ingresó al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, mediante nombramiento N° 29028 del 28 de diciembre de 1994, para ocupar el cargo de Tecnólogo Forestal, en el DEPARTAMENTO DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, hoy SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Que el actor ocupó el referido cargo por espacio de 3 años, y al considerar que estaba realizando funciones de trabajador oficial, interpuso demanda ordinaria laboral, logrando la declaratoria de trabajador oficial mediante sentencia del 28 de agosto de 2008, y continuó desarrollando las funciones inherentes a las de profesional universitario, como lo ha venido haciendo desde que ingreso a la entidad; que posterior a ello ha cambiado de dependencias en la misma SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, con cargos similares al de PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

Que por necesidad del servicio el actor fue encargado como JEFE DE SECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBORIZACIÓN, hoy LÍDER DE PROYECTO, lo anterior, mediante oficio 003790 del 3 de agosto de 2001, cumpliendo funciones de profesional universitario, pues en virtud de la Ley 617 de 2011, el cargo antes mencionado quedó sin titular por despido y supresión del mismo, y así ocurrió durante 3 años, hasta que la anterior titular del cargo fue reintegrada por orden judicial, pues este cargo volvió a ser creado mediante el Decreto 742 de 2003, asistiéndole así derecho al demandante a la nivelación salario durante los 3 años que estuvo reemplazando a la titular del cargo, al ser este un derecho convencionalmente reconocido.

También indica el escrito introductorio, que el día 19 de junio de 2007, el demandante fue trasladado a la UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS hoy INFRAESTRUCTURA FÍSICA, a realizar “supuestamente” las funciones propias del cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO, que detenta el demandante, pero en realidad cumplió las funciones propias del asistente del líder de la mencionada unidad.

Que el día 1 de marzo de 2012, el actor fue trasladado nuevamente, a la UNIDAD DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN de la SECRETARIA de INFRAESTRUCTURA FÍSICA, en la sede del vivero municipal, para desempeñar funciones de Técnico Administrativo, pero las funciones que terminó realizando corresponden al de Profesional Universitario, el cual tiene en la actualidad una asignación mensual de \$3.459.344, superior a la devengada por el demandante como técnico administrativo de \$2.483.331.

Que la diferencia salarial y prestacional entre los dos cargos, le debe ser reconocida y pagada al demandante, al haber este, desempeñado las mismas funciones del Profesional Universitario, por más de 15 años, máxime que el demandante es beneficiario de la convención colectiva de trabajo, pues desde que se posesionó como trabajador oficial, se afilió al sindicato de trabajadores del Municipio de Medellín “SINTRAMUMED”.

También expone la parte activa, que el señor LÓPEZ JARAMILLO, además de ser beneficio de la convención colectiva de trabajo, ostenta los títulos de Profesional en Administración de Empresas Agropecuarias, con especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos y Privados, Tecnólogo Agropecuario, y por ello le asiste derecho a obtener no solo el salario y las prestaciones sociales del cargo de profesional universitario, sino a mantener ese mismo cargo por haberlo ocupado durante más de 5 meses, de conformidad con las cláusulas tercera y veintiuna de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1992.

Que en tal sentido se han presentado solicitudes de nivelación salarial al municipio de Medellín en los años 2004, 2009 y 2014, obteniendo respuesta

negativa por parte de la accionada a través del oficio con radicado 200400015316, y la resolución N° 12322 de 2014.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que al demandante JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO le asiste derecho a la nivelación salarial y reajuste prima de junio, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de antigüedad, prima de vida cara, prima de aguinaldo y horas extras, a partir del 3 de agosto de 2001, al igual que todo aquello que ultra y extra petita resulte acreditado en el plenario, junto con la indexación de las condenas y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, el MUNICIPIO DE MEDELLIN, la contestó a través de su vocero judicial (fls. 303 al 318), oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, precisando, frente a los hechos allí narrados, que el demandante fue nombrado en provisionalidad mediante Decreto 1154 de 1994, para desempeñar el cargo de carrera administrativa denominado “TECNÓLOGO FORESTAL”, adscrito a la División Operativa de la Secretaria de Obras Públicas, tomando posesión del referido cargo a partir del 28 de diciembre de 1994, y posteriormente fue nombrado mediante Decreto 00808 del 28 de junio de 1995, en periodo de prueba, en el mismo cargo que venía ocupando y una vez cumplidos los requisitos, quedó inscrito en el escalafón de la carrera administrativa en el cargo de tecnólogo forestal, ocupando dicho cargo por más de 3 años.

Que es cierto, que el demandante mediante sentencia judicial logró la declaratoria de trabajador oficial, al considerarse, por parte del operador judicial, que las funciones por él realizadas eran propias de un trabajador oficial, y dado que estas mismas funciones las ha venido ejecutando después de la declaratoria judicial, ahora no puede alegarse que son funciones propias del cargo de Profesional Universitario, tornándose improcedentes las pretensiones de la demanda. Que no es cierto que el demandante haya sido encargado como

Jefe de Sección de Zonas Verdes y Arborización, mediante el oficio con radicado 003790 del 3 de agosto de 2001, pues además de no contar con las condiciones académicas para tal encargo, las funciones a él asignadas, fueron precisamente la prueba determinante para declararlo trabajador oficial.

También señala la réplica, que es cierto que el demandante, a partir del 19 de junio de 2007, fue trasladado a la Unidad de Maquinaria y Equipos de la Secretaria de Obras Públicas para desempeñar funciones de técnico administrativo, y luego a la partir del 1° de marzo de 2012 retornó a la Unidad de Paisajismo y Arborización, para realizar funciones relacionadas con producción de árboles, plantas ornamentales y manejo de vivero en general, que corresponden al manual de funciones de técnico administrativo. Y finalmente, aduce la demandada, que si bien es cierto el demandante es beneficiario de la convención colectiva de trabajo, la nivelación salarial que pretende con fundamento en la clausula tercera de la convención 1991-1992, no le resulta aplicable, pues la mayor remuneración consignada en esta norma convencional solo aplica frente a otro cargo de trabajador oficial, mas no frente a un cargo de empleado de carrera administrativa; y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“cumplimiento de decisión judicial – cosa juzgada, inexistencia de la obligación, inexistencia de fuente obligacional que permita la satisfacción de la pretensión principal de nivelación salarial, falta de causa para pedir y carencia del derecho reclamado, prescripción, compensación, buena fe, y la genérica”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de consulta, la juez A Quo en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 27 de noviembre de 2018, DECLARÓ probada la excepción de “COSA JUZGADA” parcial respecto de las pretensiones formuladas que comprenden la nivelación salarial por el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2001 y el 14 de noviembre de 2008, en consideración al fallo de segunda instancia de fecha 28 de agosto de 2008, donde se declaró que el demandante es trabajador oficial.

También DECLARÓ probadas las excepciones de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN” respecto de aquellos derechos que pudieron causarse con anterioridad al 19 de noviembre de 2011.

Por último, impuso las costas del proceso en la primera instancia, a cargo del demandante y a favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la falladora de instancia que, durante el periodo analizado por el Tribunal Superior de Medellín en la sentencia del 28 de agosto de 2008, se concluyó que el demandante cumplía funciones de trabajador oficial al servicio del Municipio de Medellín, y por ende al existir cosa juzgada frente a este periodo, no se hará pronunciamiento alguno.

En relación con la excepción de prescripción parcialmente declarada, consideró la juez de primer grado que, si bien el demandante ha venido solicitando la nivelación salarial desde el año 2004, se tendrá en cuenta la última reclamación efectuada en el año 2014, y por ello se encuentra prescrita la acción judicial para reclamar el eventual derecho a la nivelación salarial, con anterioridad al 19 de noviembre de 2011.

Y finalmente, indicó la juez de primer grado frente a la excepción de inexistencia de la obligación, que esa mixtura que pretende el demandante de conservar su calidad de trabajador oficial, pero accediendo a la mayor asignación salarial del profesional universitario, en aplicación de la cláusula 20 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2011, resulta jurídicamente improcedente.

Y que al analizar la problemática jurídica, bajo la óptica constitucional del principio de primacía de la realidad sobre las formas, debe decirse que el demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, esto es, demostrar la ejecución del mismo cargo, las mismas funciones y la misma jornada laboral, máxime que desde los hechos de la demanda ni siquiera hizo un juicio comparativo, esto es, frente a quien se estaba comparando

salarialmente, y que si en el hipotético caso se tomara al señor Jorge Ochoa como parámetro de comparación durante el tiempo en que el demandante laboró en el área de mantenimiento y equipos, debe decirse que este trabajador, tenía otras funciones que no tenía asignadas el demandante, como la de asesorar al jefe, y el manejo del software.

Que si bien es cierto, a folios 93 del plenario, está probado que el demandante en el año 2007 fue asignado al área de maquinaria y equipos, de dicha prueba documental no se puede inferir que le fueran asignadas funciones de Profesional Universitario, y mismo ocurre con el periodo comprendido entre marzo de 2012 hasta la fecha, pues ninguno de los testigos laboró con el demandante en el vivero municipal, no constándoles de manera personal y directa que el actor hubiese cumplido funciones como el administrador de esa dependencia, tornándose en testigos de referencia.

VI. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la absolución impartida en la primera instancia, el apoderado judicial del demandante, presenta recurso de apelación, argumentando que en la sentencia de segunda instancia de fecha 28 de agosto de 2008, no se reconoció al demandante como capitán de cuadrilla, sino como tecnólogo forestal y trabajador oficial, y que si bien es cierto el capitán de cuadrilla puede ser el trabajador oficial de más categoría, el tecnólogo forestal tiene asignadas unas funciones muy diferentes, y que el demandante solo coordinaba cuadrillas como tecnólogo forestal.

En segundo lugar, expone que la convención colectiva de trabajo hace alusión a los trabajadores oficiales que ocupen un cargo por más de 5 meses en forma continua o discontinua, pero de manera alguna restringe sus efectos a que estos trabajadores oficiales puedan ser ocupados en los cargos de los servidores públicos, como tantas veces el municipio lo ha hecho, y tantas veces se les ha reconocido esa sobre remuneración.

Afirma, que la convención colectiva de trabajo debe operar en beneficio de los trabajadores, pues esta es su razón de ser, esta convención no dice que

el trabajador oficial pierda tal calidad por hacer efectiva esa sobre remuneración reclamada.

Dice que todos los testigos hicieron alusión a las funciones que realizó el demandante López Jaramillo, tanto en la Secretaria de Obras Públicas como en el Vivero Municipal, todos hicieron alusión a que el demandante atendía el programa “AM”, la contratación, la coordinación del personal, así como la arborización y el cultivo para toda la ciudad de Medellín, dejando en claro que todas estas funciones, estaban a cargo de un Profesional Universitario, al que el demandante reemplazó.

Alegatos de conclusión

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

VI. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Nivelación salarial, y reajuste prestacional, en aplicación de una norma convencional: Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El problema jurídico a resolver por la Sala, teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, consiste en determinar, si al demandante JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO le asiste derecho a la sobre remuneración salarial y prestacional que por ascenso regula la CLAUSULA VEINTE de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2011 suscrita entre el Municipio de Medellín y su organización sindical, únicamente en relación con el periodo laborado con posterioridad al 19 de noviembre de 2011, y sobre el cual se declaró probada la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” por parte de la A Quo.

Para resolver la problemática suscitada, habrá de partirse de los hechos probados e indiscutidos en el plenario, entre los cuales se destacan los siguientes:

**Que mediante sentencia judicial del 28 de agosto de 2008 proferida por la Sala Décimo Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, se declaró que el señor Jesús Antonio López Jaramillo es un trabajador oficial del municipio de Medellín, en el cargo de técnico forestal, adscrito a la secretaria de Obras Públicas del municipio (fls.262 al 276)*

**Que en cumplimiento a la esta decisión judicial, la entidad accionada expide la resolución N° 7114 del 11 de diciembre de 2008 (fls.53 al 58) reconociéndole al demandante la suma de \$44.371.035 por concepto de beneficios convencionales adeudados en su calidad de trabajador oficial – auxiliar administrativo (tecnólogo forestal).*

**Que mediante oficio N° 200700192783 del 14 de junio de 2007, el Secretario de Obras Públicas, le comunica al demandante que, a partir del 19 de junio de 2007, será trasladado a la Unidad de Maquinaria y Equipo, donde continuará prestando sus servicios y cumpliendo las funciones de técnico Administrativo que apliquen a dicha unidad, y estará bajo la coordinación del ingeniero Héctor Daniel Marín – Líder de Programa Unidad de Maquinaria y Equipo (fls.93).*

**Que mediante oficio N° 20120081124 del 22 de febrero de 2012, la Secretaria de Obras Públicas, le comunica al demandante que, a partir del 22 de febrero de 2012, y por necesidad del servicio, desarrollará sus funciones en actividades relacionadas con andenes, senderos, cordones y obras de drenaje (fls.72)*

**Que mediante oficio N° 201300105500 del 1° de marzo de 2012, la Secretaria de Obras Publicas le informa al demandante que a partir del 5 de marzo de 2012 y por necesidades del servicio, pasará a realizar sus funciones en actividades relacionadas con producción de árboles, plantas ornamentales y manejo del vivero en general (fls.71).*

**También está probado que el demandante López Jaramillo se encuentra afiliado a la organización sindical denominada "SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE MEDELLÍN – SINTRAMUMED" desde el 14 de septiembre de 2007, y que ende se beneficia de la convención colectiva de trabajo suscrita con el Municipio de Medellín (fls.261).*

Y finalmente está probado en el plenario con la prueba documental visible a folios 258 al 260, que el demandante detenta los títulos académicos de "ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS", a partir del 30 de noviembre de

2007, "TECNÓLOGO AGROPECUARIO" a partir del 30 de abril de 1982, y "ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS" a partir del 8 de octubre de 2010.

Nivelación y reajuste salarial

Para resolver, debe recordarse que el fundamento normativo bajo el cual, el demandante reclama lo que él denomina una nivelación salarial y prestacional, se encuentra consignada en el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo 2008-2011 suscrita entre el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la Organización Sindical denominada "SINTRAMUMED", visible a folios 221 al 253 del plenario, veamos:

"ARTÍCULO 20: ASCENSOS

Todo trabajador que a partir de la vigencia de la presente Convención sea ocupado por un periodo superior a un día en un oficio o cargo de mayor remuneración para el cual no fue contratado, semanalmente se le reportará el tiempo por su jefe inmediato y se le reconocerá la mayor remuneración del oficio para el cual fue encargado. (Clausula 3. Decreto 20 de 1977 y 21. Convención Colectiva 1991-1992).

Así mismo todo trabajador, que el 1 de enero de 1991 o con posterioridad haya cumplido o cumpla (5) meses en un cargo de mayor remuneración para el cual no fue contratado, se hará acreedor a dicho cargo y en ningún caso podrá ser desmejorado de su salario.

Cuando se presente la primera vacante de dicho cargo, será promovido a él (Clausula 21. Convención Colectiva 1991-1992).

CASO CONCRETO

En el presente asunto, el señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO alega haber sido contratado como trabajador oficial, para ocupar el cargo de "tecnólogo forestal", pero el Municipio de Medellín lo ha venido encargando de en un oficio o cargo de mayor remuneración para el cual no fue contratado, dándose así los presupuestos de la norma convencional citada, esto es, ha venido cumpliendo funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO en la UNIDAD DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN adscrita a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín – hoy Secretaría de Infraestructura Física, en los periodos comprendidos entre el 3 de agosto de 2001 y el 18 de junio de 2007 y entre el 5 de marzo de 2012 hasta la fecha, e igualmente ha cumplido

funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO en la UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO de la misma Secretaría, entre el 19 de junio de 2007 y el 4 de marzo de 2012.

También expone la activa, que en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo, al demandante se le adeudada el mayor valor del salario y las prestaciones, por los periodos de tiempo antes señalados, pues la norma convencional no limita el ascenso a cargos de trabajadores oficiales de mayor jerarquía, por el contrario, posibilita ejercer un cargo de empleado publico como lo es el de PROFESIONAL UNIVERSITARIO frente al cual se pretende la nivelación salarial, lo anterior sin perder su calidad de trabajador oficial declarada judicialmente en providencia del 28 de agosto de 2008.

Sin embargo, estima la Sala que la Nivelación Salarial pretendida por el actor, resulta jurídicamente improcedente, toda vez que la Convención Colectiva de Trabajo que regula el tema de los “ascensos”, al interior del Municipio de Medellín, solo aplica frente a otro cargo de trabajador oficial de mayor jerarquía, pues de manera alguna una convención colectiva, podría permitir el ascenso a un cargo de empleado público, como lo interpreta la parte activa, pues con ello se desconocería la clasificación legal de empleados públicos y trabajadores oficiales a la que alude el art. 5° del Decreto 3135 de 1968, así como el mandato art. 416 del Código Sustantivo de Trabajo, según el cual, la convención colectiva de trabajo sólo es aplicable a los trabajadores oficiales, razón por la cual, aún en el evento de que los empleados públicos se encuentren afiliados al sindicato con el respectivo aporte económico, no resulta viable que los mismos se beneficien de las convenciones colectivas que suscriban aquellos.

Y es que de la lectura integral del art. 20 de la Convención Colectiva de Trabajo, es claro que la finalidad de dicha norma es permitir el ascenso de un trabajador oficial que haya cumplido o cumpla (5) meses en un cargo de mayor remuneración, y una vez se presente una vacante definitiva de ese cargo, será promovido a él (Clausula 21. Convención Colectiva 1991-1992).

Por lo tanto, para que ese ascenso al que alude la norma convencional sea viable, es apenas lógico que el cargo de mayor jerarquía sea también de trabajador oficial, pues de lo contrario, la convención colectiva de trabajo no tendría validez frente al cargo de empleado público, pues estos se encuentran al margen de estos acuerdos de voluntades.

Y es que no puede olvidarse que los EMPLEADOS PÚBLICOS, se vinculan mediante una relación legal o reglamentaria, esto es, debe existir un acto administrativo de nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión, mientras que los TRABAJADORES OFICIALES, se vinculan a través de una relación contractual, existe un contrato laboral de trabajo que contiene las condiciones de la relación, el régimen laboral para los trabajadores oficiales está contenido en el mismo contrato de trabajo, así como en la convención colectiva, pacto colectivo, o reglamento interno de trabajo.

Y en cuanto a las funciones, los EMPLEADOS PÚBLICOS desarrollan aquellas que son propias del Estado, de carácter administrativo, de jurisdicción o de autoridad, las cuales se encuentran detalladas en la Ley o el reglamento, mientras que los TRABAJADORES OFICIALES desarrollan actividades que realizan o pueden realizar ordinariamente los particulares, entre otras, labores de construcción y sostenimiento de obras públicas.

El demandante expone que las funciones realizadas en la UNIDAD DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN entre el 3 de agosto de 2001 y el 18 de junio de 2007 y entre el 5 de marzo de 2012 hasta la fecha, así como en la UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO entre el 19 de junio de 2007 y el 4 de marzo de 2012, son propias de un PROFESIONAL UNIVERSITARIO, cargo que sin lugar a dudas, corresponde por su naturaleza a clasificación de empleado público, pues según el MANUAL DE FUNCIONES para este cargo expedido por el Municipio de Medellín, obrante a folios 254 del plenario, su función general es la de: *“...Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, y que según su complejidad y competencias exigida le pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales...”* es decir, se trata de un cargo eminentemente administrativo.

También destaca la Sala lo relatado por el actor en el HECHO SEGUNDO de la demanda, veamos:

*“SEGUNDO: El señor LÓPEZ JARAMILLO, estuvo en el mencionado cargo por espacio de tres años aproximadamente. Por considerar que su labor estaba dentro del manual de funciones para el cargo de trabajador oficial, interpuso demanda ordinaria laboral para que fuera declarado trabajador oficial, donde la justicia le dio la razón y el 28 de agosto de 2008 en fallo judicial, **fue declarado trabajador oficial y continuó desarrollando las funciones inherentes a las de Profesional Universitario, como lo viene haciendo desde su ingreso a la entidad**; posterior a ello lo han cambiado de dependencias en la misma secretaria, con cargos similares a las de Profesional Universitario...”*

Según lo narrado en este supuesto fáctico, el demandante ha venido cumpliendo las mismas funciones desde que ingresó a la entidad en el año 1994, en consecuencia, y teniendo en cuenta lo confesado en este sentido, y que esas funciones fueron las que dieron lugar a declaratoria judicial de trabajador oficial por parte de este mismo Tribunal de Distrito Judicial, mediante providencia del 28 de agosto de 2008, no puede ahora alegar que esas funciones son propias de un empleado público, para con ello beneficiarse de la mayor asignación salarial que percibe el cargo denominado “PROFESIONAL UNIVERSITARIO”, desconociendo los efectos de cosa juzgada irradiados por la referida sentencia, que la dotan de un valor definitivo e inmutable, es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio, valiéndose de nuevos testigos que declaren que el demandante ha realizado funciones de empleado público.

Así las cosas, estima, la Sala que, en el presente asunto, existía mérito suficiente para declarar probadas las excepciones de “COSA JUZGADA” e “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, como bien lo concluyó la juez de primer grado.

Ahora, cabe resaltar que con relación con el principio de “trabajo igual, salario igual” al que alude el art. 143 del Código Sustantivo de Trabajo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de

Justicia, como puede verse en la sentencia SL2215-2020, del 8 de julio de 2020 con radicación 69.226, precisó frente al tema, lo siguiente:

“Para resolver, importa memorar que esta Corte ha considerado que para exigirse la igualdad retributiva es necesario que se demuestre que haya similar efectividad, o en términos de la codificación sustancial laboral similar eficiencia y bajo tal concepto ha aludido, entre otras nociones a la antigüedad o a la experiencia. En sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad 30474, se precisó:

Con todo, no está de más precisar que, como lo pone de presente la réplica, esta Sala de la Corte, entre muchas otras en la sentencia que por ella se reseña, ha considerado que la antigüedad y la experiencia del trabajador son circunstancias que permiten justificar una diferenciación en el trato salarial, sin que con ello se entienda que existe un proceder discriminatorio.

A ese respecto, en un caso semejante, en sentencia del 10 de junio de 2005, radicación 24272, aunque en relación con otras normas pero que, en su esencia, consagran el mismo principio de a trabajo igual, salario igual, expresó lo que a continuación se transcribe:

“Sobre el particular, cumple advertir que es cierto, como lo afirma la censura, que la igualdad salarial por trabajo de igual valor es un principio del derecho del trabajo universalmente reconocido que se halla consagrado en convenios internacionales de trabajo. En el sistema jurídico colombiano se acoge bajo el aforismo “a trabajo igual, salario igual” y cuenta con pleno respaldo constitucional en el artículo 13 de la Carta Política que consagra el derecho a la igualdad, del que son compendio fiel el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945. Ha explicado esta Sala de la Corte que ese principio proscribe el trato diferente en materia salarial y con él “se reconoce una relación de equivalencia de valores prestacionales conmutativos en cuanto a la fuerza de trabajo que suministra el trabajador al patrono y que este debe retribuir como contraprestación, sobre un plano de igualdad jurídica y material...” (Sentencia del 7 de febrero de 1996. Radicado 7807).

“Pero también de tiempo atrás la jurisprudencia laboral ha precisado que la cabal utilización del principio no significa una equiparación automática en materia salarial para todos los trabajadores, pues no consiste en imponer por ministerio de la ley una indistinta asimilación salarial, de suerte que es legítimo que existan diferencias razonables en la remuneración de los trabajadores, siempre y cuando estén fundadas en razones objetivas, como el régimen jurídico que se les aplica, o surgidas de aspectos relativos a la cantidad y la calidad del trabajo realizado, tales como la antigüedad del trabajador, la capacidad profesional, las condiciones de eficiencia, el rendimiento, la jornada laboral, etc.

“Y esos elementos que justifican el trato diferente no han quedado totalmente al arbitrio del empleador, pues la ley se ha encargado de establecer en cuáles casos debe existir igualdad en la remuneración y los factores laborales que dan derecho a esa igualdad.

(...)

“En un caso similar al que aquí se analiza, se pronunció esta Corte en sentencia del 24 de mayo de 2005, radicación 23148, de la siguiente manera:

“Finalmente, resulta oportuno anotar en torno del tema de la nivelación salarial controvertido en este asunto, que está ligado indisolublemente al principio de a trabajo igual salario igual, que la jurisprudencia tiene reiterado que esta garantía tiene aplicación imperativa cuando se desempeña el mismo puesto, en condiciones de eficiencia iguales; de manera que en relación con el segundo presupuesto referido cobran preponderancia para la fijación de salarios factores tales como la capacitación para el cargo, la antigüedad y experiencia de los trabajadores, que permiten una asignación salarial distinta, sin que se entienda que obedece a un proceder discriminatorio, pues se fundamenta en razones lógicas que en gran medida se encuentran fundadas en la equidad.” (Subraya la Sala).

De acuerdo con lo adocinado por esta Corporación, no se observa el yerro jurídico que la censura le atribuyó al juez de apelaciones, pues lo cierto es que los criterios a tener en cuenta para vislumbrar las condiciones similares de eficiencia son el de antigüedad, rendimiento, experiencia, adaptación al medio de trabajo, iniciativa, y nivel profesional o académico, mismas que memoró el ad quem para concluir que en el caso del recurrente frente a los dos abogados con quienes se comparó, no hubo trasgresión al principio de a trabajo igual, salario igual.” (Negrilla de esta Sala)

Y el mismo alto tribunal, en sentencia SL16217 del 25 de noviembre de 2014 (Radicación 45830), indicó:

*“De lo estatuido en el artículo 143 del CST se deriva que dos trabajos se consideran iguales cuando también son iguales el “puesto”, la jornada y las condiciones de eficiencia de quienes los desempeñan; en tal caso el salario deberá ser igual. Se deriva también de ese precepto que dos trabajadores pueden recibir salarios diferentes, cuando no hagan el mismo trabajo, en puesto, jornada y condiciones de eficiencia. Es decir, la citada norma contempla tres criterios (tertium comparationis) que deben cumplirse para que dos trabajadores se consideren iguales y reciban la misma retribución: dos de tipo objetivo (puesto y jornada) y uno subjetivo (**condiciones de eficiencia**). Si uno solo de esos elementos es distinto, justificará una diferencia retributiva entre ambos trabajadores, pues, en tal hipótesis, sus trabajos no se considerarán iguales” (Negrilla de esta Sala)*

Estima la Sala que en el presente asunto no se demostraron los elementos esenciales para darle aplicación a este principio, pues durante el periodo no afectado por el fenómeno prescriptivo, el actor no demostró haber desempeñado un puesto, y una jornada en condiciones de eficiencia iguales a las de un PROFESIONAL UNIVERSITARIO adscrito a la UNIDAD DE

MAQUINARIA Y EQUIPO entre el 19 de noviembre de 2011 y el 4 de marzo de 2012, y a un PROFESIONAL UNIVERSITARIO adscrito a la UNIDAD DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN desde el 5 de marzo de 2012 en adelante.

Pues los testigos allegados al plenario, esto es, los señores OSCAR DARÍO ZAPATA VILLA, EDGAR DARÍO MEJÍA MENESES, OSCAR DE JESUS JIMÉNEZ, y GERMAN DARÍO TORO BEDOYA, ni siquiera laboraron con el demandante en la UNIDAD DE PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN, y por ende no les consta en forma personal y directa, si este cumplió funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO al interior de esta dependencia, pues todo cuanto conocieron, obedeció a los comentarios que les hiciera el propio demandante y a visitas esporádicas al vivero municipal.

Y en relación al tiempo laborado en la UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO no afectado por el fenómeno prescriptivo, no puede afirmarse por parte de la Sala, que el demandante haya cumplido funciones de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, en condiciones de eficiencia iguales, a las del señor JORGE DARÍO OCHOA, quien, si llegó a detentar dicho cargo en la esta UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Pues según lo manifestado por el testigo GERMAN DARÍO TORO BEDOYA, el demandante y el señor JORGE DARÍO OCHOA no llegaron a compartir la misma sede, pues este ultimo se jubiló en el año 2007, esto es, antes de la llegada del demandante a la referida unidad, lo anterior aunado al hecho de que el actor refiere que siempre ha realizado las mismas funciones desde que ingreso al municipio, y con las cuales logró la declaratoria de trabajador oficial.

Y con relación a la carga de la prueba que le asiste al trabajador en aquellos asuntos donde se pretenda la nivelación salarial, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la sentencia SL17462 del 10 de diciembre de 2014 (Radicación N° 44317) precisó lo siguiente:

“Sobre el tema de la carga de la prueba, la Sala tiene adoctrinado que el trabajador que pretenda una nivelación salarial por aplicación del principio «a trabajo igual salario igual», tiene por carga probatoria demostrar el «puesto» que desempeña y la existencia de otro trabajador

que desempeña o desempeñó el mismo puesto o cargo con similares funciones y eficiencia.

(...)

Sin embargo, esta Corporación precisará el citado criterio, en cuanto a que, tratándose de relaciones de trabajo causadas antes de la modificación introducida al art. 143 del CST, por el art. 7º de la L. 1496/2011, según la cual «Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación», en casos como el presente, en que la relación laboral culminó en 2006, atendiendo al principio de la carga dinámica –y no estática- de la prueba, también deberá invertirse la carga probatoria. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio en materia retributiva, le corresponde al empleador –dado que está en mejores condiciones para producir la prueba-, justificar la razonabilidad de dicho trato”.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia absolutoria de primer grado, por encontrarse ajustada a derecho, a la jurisprudencia nacional, y a las probanzas recaudadas en la litis.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del demandante, las costas procesales en esta instancia, estarán a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada, de conformidad con el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho, la suma de \$908.526 equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021.

VIII - DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho, la suma de \$908.526 equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Se ordena la notificación por ESTADOS de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 054 del 5 de abril de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>